

Las primeras decisiones del gobierno de Rajoy, profundizan y consolidan las medidas aplicadas por el anterior gobierno, con recetas a la crisis que hacen recaer, otra vez, el peso de la responsabilidad y el sacrificio sobre la ciudadanía y la clase trabajadora. Lejos de anular los recortes de Zapatero, después de tanta crítica, los ha asumido radicalmente convirtiendo, lo que pretendía ser transitorio, en un paso atrás permanente.

De prometernos un nuevo paraíso, han pasado a avisarnos de que su salida de la crisis va a costar sangre, sudor y lágrimas, pero sólo a quienes no tenemos otra cosa que nuestras manos y nuestra cabeza para trabajar. **No se trata de reformas temporales**, como quieren hacer creer, son recortes que pretenden diseñar un nuevo modelo social, alejado del Estado del Bienestar y que suponen un duro golpe a la dignidad de todos y todas.

Son medidas que se aplican para plegarse a las demandas de las grandes corporaciones y de los organismos internacionales liberalizadores, sacrificando el objetivo de crear trabajo digno y de mantener y mejorar la protección social del conjunto de la ciudadanía, para priorizar la reducción del déficit público y ampliar las posibilidades de negocio para las grandes empresas. Se pretende sanear la banca española con recursos públicos, otorgando créditos baratos, que luego utilizan para comprar deuda a los estados, con un interés más alto, y así seguir cobrando pensiones multimillonarias y obteniendo beneficios utilizando las ayudas públicas, es decir, el dinero de toda la población.

Su salida no es dar respuesta a las necesidades básicas de la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas, a la clase trabajadora, el 99% que no hemos provocado la crisis, sino ampliar, aún más, las ganancias de los que ya tienen mucho.

Entre las principales medidas aplicadas están:

- **La congelación del salario mínimo, uno de los más bajos de la Unión Europea.**
- **La reducción del salario del personal de las Administraciones y Empresas Públicas.**
- **El aumento de la jornada laboral en las Administraciones Públicas.**
- **La paralización de la contratación en el sector público.**
- **La reducción de los fondos destinados los servicios sociales.**
- **La desaparición de la solidaridad internacional.**
- **El aumento de los impuestos a las trabajadoras y trabajadores, pero no para el 1 % de la población, los beneficiarios de las grandes fortunas, que continúa protegido fiscalmente.**
- **La disminución del poder adquisitivo de las pensiones, con una subida del 1%, cuando el IPC está en torno al 2,9%.**

A todo esto, le seguirán, según las afirmaciones gubernamentales, **nuevas reformas como la laboral**, que pretende acabar con la negociación colectiva, tal y como la conocemos, dejando que en cada empresa haya unas condiciones laborales distintas, sin convenio colectivo que ampare a las personas trabajadoras con unos mínimos derechos. Y, cómo no, también **se privatizarán** las pocas empresas públicas que todavía tienen beneficios y se **ampliarán los conciertos** educativos y sanitarios.

Estas medidas no son la solución a la crisis. Por el contrario, agravarán la recesión, destruirán más trabajo y dejarán a la mayoría de la población en condiciones mucho más precarias. Estas medidas ponen en riesgo una sanidad y una educación públicas, gratuitas y de calidad, y concentran los recortes en el sector público, que con la excusa de reducir el déficit se verá aún más debilitado, dejando así vía libre a la privatización de los servicios.

Ante esta situación de emergencia social, económica y de derechos, no podemos permanecer inmóviles. Debemos preguntarnos: ¿Por qué la tijera siempre corta la misma tela? ¿Por qué los que más tienen nunca pierden? ¿Por qué el déficit es más importante que las personas?

Nos importa el trabajo, nos importan las personas, nos importan los servicios públicos, nos importa la pobreza, nos importan nuestras vidas y no los vaivenes de la bolsa o las finanzas de banqueros y especuladores.

En este 2012 parece que quieren dar un vuelco definitivo a nuestros derechos. Por nuestra parte, tendremos que hacer todo lo posible para que no suceda.

USTEA inicia este año con el compromiso de continuar defendiendo servicios públicos universales y de calidad, trabajo y condiciones de vida dignas... Por ello, realizamos un llamamiento al conjunto de la sociedad andaluza para que desde sus pueblos y ciudades, desde sus centros de trabajo y la calle se movilicen en la defensa de unos intereses que son de todos y de todas.

En ese camino de reivindicación nos encontraremos.